

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA**

Auto interlocutorio

PROCESO No.	76001-23-33-004-2017-01428-00
DEMANDANTE	COLPENSIONES
DEMANDADO	LIBARDO SALAZAR GRAJALES
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (Lesividad)

Santiago de Cali, Primero (01 de Julio de Dos Mil Veinte (2020)

La apoderada de COLPENSIONES, con fundamento en el artículo 229 y siguientes del CPACA, solicita la medida cautelar de suspensión provisional contra la Resolución No. GNR 264729 del 22 de julio de 2014, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez al señor Libardo Salazar Grajales.

La solicitud de suspensión provisional se sustenta en los siguientes argumentos:

-. Que la demanda se encuentra razonadamente fundada en derecho, toda vez que la Resolución No. GNR 264729 del 22 de julio de 2014, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez al señor Libardo Salazar Grajales, es contraria al ordenamiento jurídico, como quiera que la prestación fue liquidada teniendo en cuenta el promedio de los factores devengados en el último año de servicios conforme lo establecido en el Decreto 546 de 1971, cuando lo procedente era aplicar los 10 últimos años, según lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993.

-. Que el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales atenta contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 como una obligación del Estado.

Por su parte el demandado manifestó en su defensa lo siguiente:

-. Que la medida cautelar invocada por la entidad demandante, no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que, de

la revisión del acto cuestionado, no resulta evidente la presunta vulneración a normas superiores.

-. Que es beneficiario del régimen de transición y por tanto le resultan aplicables a su situación pensional los artículos 6 y 8 del Decreto 546 de 1971, en su calidad de funcionario de la Rama Judicial.

-. Que de aplicarse el artículo 21 de la ley 100 de 1993 para la liquidación de su pensión de jubilación, no solo se vulneraría el principio de favorabilidad y la garantía de los derechos adquiridos, sino que se desconocería el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al liquidar su mesada pensional sobre una base de liquidación distinta a la consignada en el Decreto 546 de 1971, toda vez que los dos componentes base y porcentaje son inseparable.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Procede a definir el Despacho, constituido en Sala Unitaria, si es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado, para lo cual se analizarán lo requisitos que establece la ley 1437 de 2011, para su procedencia.

Marco jurídico sobre las medidas cautelares en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

Dispone el artículo el 238 de la Constitución, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

Por su parte, el artículo 229 del CPACA establece que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Las medidas cautelares, pueden ser de carácter preventivo, conservativo, anticipativas o de suspensión y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, conforme lo regula el Artículo 230 Ibídem, del cual se destaca:

"Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

- 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.*
- 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.*
- 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.*
- 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.*
- 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.*

Parágrafo. *Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente. Donde la cuelgo*

Respecto a los requisitos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional, de los efectos de los actos administrativos el artículo 231 Ibídem, establece lo siguiente:

"...Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal

violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos...”

CASO CONCRETO:

Como se señaló en el acápite anterior, en el examen de procedencia de la medida cautelar debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameriten la imposición de la misma, tales como, la violación de las disposiciones normativas invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado , cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Además, que, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Se procederá a establecer si se cumplen dichos presupuestos en el caso concreto.

1) violación de normas superiores

Dicho presupuesto exige que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas, que el demandante haya demostrado así sea sumariamente la pertinencia de la suspensión del acto enjuiciado, y se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho.

En el sub lite, la parte demandante no acreditó este requisito pues no señala las normas superiores presuntamente vulneradas, en razón a que solo refiere que es procedente la suspensión provisional de la Resolución No. GNR 264729 del 22 de julio de 2014, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez al señor Libardo Salazar Grajales, como quiera que el cálculo o liquidación de la prestación se efectuó con fundamento en el Decreto 546 de 1971, cuando lo procedente era aplicar el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir teniendo en cuenta los 10 últimos años deservicio.

Como fundamento de su petición indicó que el reconocimiento de un prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta contra el principio de Estabilidad Financiera del Sistema General de Pensiones, establecido por el Acuerdo Legislativo 001 de 2005, toda vez que pagar tal prestación bajo esas características afecta gravemente su

capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad, y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

En el presente asunto de las pruebas que obran en el plenario, se destacan:

- La Resolución No. 31825 del 7 de septiembre de 2011, por medio de la cual el entonces Instituto de Seguro Social reconoció una pensión de vejez al demandado en cuantía de \$ 4.983.500 para el año 2011, de conformidad con el Decreto 546 de 1971, quedando en suspenso el ingreso a nómina hasta tanto fuera aportado el acto administrativo de retiro definitivo. (CD fl. 1 C.1).
- La Resolución No. GNR 356651 del 13 de diciembre de 2013, por medio de la cual COLPENSIONES reconoció una pensión de vejez al demandando a partir del 1º de diciembre de 2013, de conformidad con el Decreto 546 de 1971 (CD fl. 1 C.1).
- La Resolución No. GNR264729 del 22 de julio de 2014 (acto demandado), por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, resolviendo modificarlo parcialmente en el sentido de reliquidar la prestación conforme al Decreto 546 de 1971 en cuantía del \$ 6.073.952, efectiva a partir del 1 de mayo de 2013. De la misma se destaca:

"...El Interesado acredita un total de ...1.812 semanas ...nació el 5 de noviembre de 1955.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de Decreto 546 de 1971, "Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas."

Que la norma precitada ...se aplica por remisión del artículo 36 de la ley 100 de 1993...

La forma de liquidación de la presente prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, incluyendo como ingreso base

de cotización los factores salariales establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978...”(CD fl. 1 C.1).

- La Resolución No. GNR 110147 del 17 de abril de 2015, por medio de la cual COLPENSIONES niega la reliquidación de la pensión de vejez solicitada por el demandado (CD fl. 1 C.1).

Ahora bien, analizadas las pruebas obrantes en el plenario, no resulta palpable la violación que aduce la parte demandante, ya que, para establecer la normatividad aplicable a la forma de liquidación de la pensión de vejez del actor, es necesario examinar y valorar diversos aspectos de carácter probatorio e interpretativo que no son propios de esta etapa procesal, por lo que no se advierte en este momento la violación normativa alegada por la entidad demandante.

En efecto, en el presente caso, como no se encuentra en entredicho el derecho pensional del demandado, sino la normativa que debe aplicarse para efectos de la liquidación de la prestación reconocida en su favor mediante Resolución No. 31825 del 7 de septiembre de 2011, reliquidada a través de la Resolución No. GNR 264729 del 22 de junio de 2014, no resulta este el momento procesal oportuno para su definición, siendo su análisis propio del fallo definitivo.

Por lo anterior, el Despacho advierte que no se encuentra acreditado ninguno de los requisitos para que sea procedente la medida cautelar y, por tanto, será negada.

Finalmente, se reconocerá personería para actuar en este proceso como apoderada principal de la parte demandante, a la Dra. ELSA MARGARITA ROJAS OSORIO, portadora de la tarjeta profesional No. 79.630 del Consejo Superior de la Judicatura, y como apoderada sustituta a la Dra. Zully Tatiana Paz Montero, titular de la tarjeta profesional No. 27.9087 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a los poderes visibles a folios 53 a 58 del expediente.

En consecuencia, se;

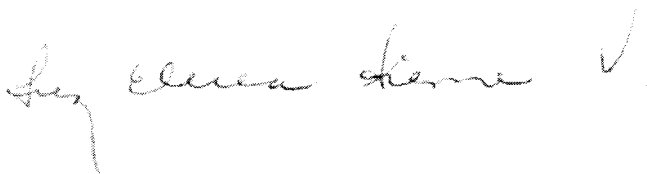
RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional de la Resolución No. GNR 264729 del 22 de julio de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER para actuar en este proceso como apoderada principal de la parte demandante, a la Dra. ELSA MARGARITA ROJAS OSORIO, portadora de la tarjeta profesional No. 79.630 del Consejo Superior de la Judicatura, y como apoderada sustituta a la Dra. Zully Tatiana Paz Montero, titular de la tarjeta profesional No. 27.9087 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a los poderes visibles a folios 53 a 58 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Proceso No. 2018-01428